
Royalty Minero

La reciente transferencia de más de \$4.600 millones a la Región de Coquimbo por concepto del Royalty Minero abre una oportunidad concreta para avanzar hacia un desarrollo más equitativo en los territorios.

No es menor que estos recursos lleguen directamente a los municipios, con cierto grado de autonomía, porque permite responder de forma más rápida a necesidades urgentes como seguridad, infraestructura y recuperación de espacios públicos. En teoría, es un paso importante hacia una descentralización más efectiva.

Sin embargo, el entusiasmo inicial debe ir acompañado de una mirada crítica. La historia reciente ha demostrado que la disponibilidad de recursos no siempre se traduce automáticamente en soluciones de impacto.

El desafío no está solo en cuánto dinero llega, sino en cómo se gestiona. Comunas como Andacollo, La Serena, Ovalle, Coquimbo entre otras, tendrán ahora la responsabilidad de priorizar inversiones que

realmente mejoren la calidad de vida, evitando caer en proyectos de bajo impacto o decisiones de corto plazo.

Además, el Royalty Minero busca compensar las externalidades de una actividad que históricamente ha generado tensiones en las comunidades: impacto ambiental, uso de recursos hídricos y desigualdad territorial. Por eso, estos fondos no deberían verse solo como una caja adicional para gastos municipales, sino como una herramienta estratégica para corregir brechas estructurales.

No basta con ejecutar obras visibles como luminarias o cámaras de seguridad; es fundamental que exista una visión de desarrollo a largo plazo. La ciudadanía, la prensa y las respectivas autoridades, también debe asumir un rol activo en la fiscalización del uso de estos recursos. Porque más allá de los anuncios, lo que está en juego es si este flujo de dinero marcará un punto de inflexión real o terminará diluyéndose como tantas otras políticas bien intencionadas.